

Los años de la dictadura militar (1976-1983)

Por Sandra Raggio

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue el último de la larga secuencia que caracterizó a la dinámica política argentina en el siglo XX. Sin embargo, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se distingue de sus antecesores, entre tantos factores, por la duración, por los alcances de las transformaciones que produjo y, sobre todo, por la magnitud y ferocidad de la represión política desplegada. Ninguno de ellos podría comprenderse sin un análisis profundo, en varios aspectos aún pendiente, de por lo menos los veinte años que lo precedieron: la dinámica y naturaleza del peculiar sistema político argentino, signado por la inestabilidad institucional, las dificultades para definir un modelo de desarrollo económico sostenido, superando el movimiento pendular de la economía, y la fuerte beligerancia entre los diferentes grupos sociales por imponer una dirección del proceso en función de sus objetivos e intereses, sin lograrlo. A fines de los sesenta, hubo una novedad: la activación y radicalización política de amplios sectores de la sociedad que se expresó en la aparición de las organizaciones armadas revolucionarias y de núcleos sindicales combativos, tanto de extracción peronista como marxista. Hacia 1976, estos rasgos compondrían un cuadro dramático.

La escena previa al golpe estuvo signada por una agudización de la conflictividad social, la intensificación de la violencia política, el descalabro económico y la profunda debilidad del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. El siniestro estado de situación que surgía de esta confluencia de factores, indudablemente entrelazados, explica la sensación de alivio con que buena parte de la población recibió la noticia del golpe, aunque faltarán menos de siete meses para las elecciones. Las ideas del “caos” y el “vacío de poder” se habían impuesto, y fueron una fuente importante de legitimación de la ruptura constitucional producida por el asalto al poder de los militares. Pero el golpe no fue una respuesta desesperada a la crisis, sino un proyecto golpista que se consumaba. La construcción de este clima fue parte de su preparación.

El Golpe

Había sido una tensa jornada, como casi todas en el último tiempo, dominada por la amenaza de un golpe inminente. Apenas pasada la medianoche del 23 de marzo de 1976, María Estela Martínez de Perón partía de la Casa Rosada en helicóptero rumbo a la residencia de Olivos. Nunca llegó a destino. Aterrizaron en Aeroparque, casi a la una de la madrugada. Con la excusa de un desperfecto mecánico, disuadieron a los cinco pasajeros de la nave a descender: la presidenta, su secretario personal, su edecán y sus custodios. Minutos después, a solas, el general José Rogelio Villarreal le comunicaba el arresto a la viuda de Perón. Las Fuerzas Armadas se habían hecho cargo del poder.¹

En menos de una hora, comenzó la toma del control del país. Se ocuparon los edificios públicos, los medios de comunicación, los sindicatos, las sedes de los partidos

¹ Para una pormenorizada descripción de estos días, véase Alberto De arriba, *El golpe*, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

políticos. Se realizaron millares de detenciones de dirigentes políticos, sindicales y militantes de las más variadas extracciones políticas².

Más tarde, por los medios masivos de comunicación, se leyó el primer comunicado de la Junta Militar, integrada por los comandantes generales de las tres fuerzas: el Teniente General Jorge Rafael Videla (Ejército), el Brigadier Ramón Agosti (Fuerza Aérea) y el Almirante Emilio Massera (Armada).

El 31 de marzo se publicó en el Boletín Oficial el “Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”, que sentó las bases constituyentes del nuevo régimen. La Junta Militar, “órgano supremo de la Nación”, gobernaría el país, a través del presidente por ella designado, quien, a su vez, designaría a los gobernadores de todas las provincias. La Junta Militar nombraría a los miembros de la Corte Suprema. Las funciones legislativas fueron delegadas al presidente con la asistencia de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), compuesta por tres oficiales superiores de cada una de las tres fuerzas. Esta división tripartita del poder entre las fuerzas sería un elemento distintivo del Proceso de Reorganización Nacional, que buscaba comprometer al conjunto de las Fuerzas Armadas en el proyecto y evitar la centralización del poder en una figura particular. No obstante, el Ejército concentraría la mayor cuota de poder.³ Jorge Rafael Videla asumió como presidente el 29 de marzo de 1976.

Los objetivos enunciados eran terminar con el desorden y la corrupción, normalizar el funcionamiento de la economía y exterminar a la subversión, sustentando el fin último de reinstalar “una auténtica democracia”. Para ello, se decretó la suspensión de toda actividad política partidaria, estudiantil o sindical, se prohibieron las huelgas y las negociaciones colectivas, se anuló la libertad de prensa y, por supuesto, se continuó con el estado de sitio implantado durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón en 1974.

¿Quiénes apoyaron el golpe? Las editoriales de los diarios nacionales manifestaron su conformidad. También lo hicieron la mayoría de las dirigencias partidarias, aunque con mayor o menor énfasis de aceptación. Entre los más efusivos, se encontraban el Partido Federal de Francisco Manrique, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), conducido por Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi, el Partido Demócrata Progresista y varios de los provinciales nucleados en la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO). La cúpula eclesial saludó con marcado alivio el inicio de una esperada y nueva etapa. También expresaron sus expectativas positivas las organizaciones empresarias, como la Asociación Permanente de Entidades Empresarias (APEGE), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

Pero las Fuerzas Armadas no sólo contaron con el beneplácito de amplios sectores civiles, sino que algunos de ellos constituyeron la coalición golpista⁴ que coordinó acciones e ideas por lo menos desde mediados de 1975⁵. Entre ellos se encontraban dirigentes de estas organizaciones empresarias y también la cúpula eclesial. El núcleo civil relevante fue la tecnocracia liberal, ligada a la alta burguesía, cuyo

² Al momento del golpe ya había miles de presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

³ Ver Hugo Quiroga, *El tiempo del “Proceso”*, Rosario, Homo Sapiens, 1999, pp. 74-76.

⁴ Para un desarrollo de la idea, véase Ricardo Sidicaro, “Coaliciones golpistas y dictaduras militares: el ‘proceso’ en perspectiva comparada”, en Alfredo Pucciarelli (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura militar*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

⁵ Si el clima de “caos” fue un factor de legitimación del golpe, el *lock out* convocado desde la APEGE, el primero en la historia argentina, puede verse como parte de la estrategia golpista. No obstante, sería erróneo pensar esta coordinación como un plan perfecto con objetivos únicos y previsibles por parte de cada uno de los actores involucrados. Se trata de una dinámica menos simple.

representante era sin dudas José Alfredo Martínez de Hoz, quien ocuparía la cartera de economía hasta 1981⁶.

Los liberales compartían con las Fuerzas Armadas su rechazo a las experiencias populistas y desarrollistas que habían dominado en el pasado, y veían en esta nueva empresa política la oportunidad para desplegar sus tantas veces relegados proyectos sustentados en la idea del libre mercado y la desregulación de la economía, superando las trabas impuestas por un Estado intervencionista que había beneficiado a los sectores industriales mediante un crecimiento al que denominaban como “ficticio”. Tal como sostiene Marcelo Cavarozzi⁷, la dictadura prometía erradicar a aquellos elementos que habían obstaculizado la prosecución de su ideario: la subversión y todo activismo político del sector popular, la sociedad política populista expresada en el peronismo, los sindicatos y el Estado tutelar y el sector industrial urbano que había crecido a la sombra de éste. Liberalismo económico y autoritarismo político se conjurarían para producir en el país una de las más profundas y cruentas transformaciones de su historia.

El Plan Martínez de Hoz y sus consecuencias

El sentido fundacional de la coalición golpista se expresó en gran parte, aunque no solamente, en las medidas tomadas en el autodenominado “Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina”, que Martínez de Hoz presentó públicamente pocos días después del golpe. La lucha contra la inflación sería el punto más enfatizado ante una opinión pública afectada por los terribles incrementos de los precios en la última etapa de gobierno de Isabel.

Las medidas impuestas con urgencia muestran la intencionalidad y profundidad de los cambios perseguidos: el congelamiento salarial, la supresión del sistema de control de precios y un incremento del tipo de cambio mediante un cronograma mensual de devaluación. La conjunción de las dos primeras implicó una pérdida de un tercio del salario real, ya que la inflación ascendió al 54,2%, lo que produjo una fuerte y rápida regresión en el patrón de distribución de los ingresos.

El programa siguió con la apertura de la economía, promoviendo una liberalización del mercado externo discriminatoria y asimétrica que liberó de aranceles aduaneros a algunas ramas de actividad exponiéndolas a la competencia de los productos extranjeros, al mismo tiempo que protegió a ciertos grupos oligopólicos garantizándoles una alta rentabilidad. Entre las medidas se incluyó la anulación de las retenciones a las exportaciones agroganaderas.

La reforma financiera de 1977 completó el plan. Se desregularon los flujos internacionales de capital, se liberalizaron las tasas de interés, se le dio garantía estatal del cien por ciento a los depósitos bancarios y se promovió la privatización de las carteras de créditos a través de las entidades financieras privadas. Con la política cambiaria implementada en 1978, mediante la fijación de un cronograma de devaluación gradual del tipo de cambio, la famosa “tablita” y la apertura irrestricta del mercado de capitales, se profundizó el modelo de valorización financiera.

Si bien el ministro seguiría a cargo de la cartera económica hasta 1981, la crisis financiera de 1980, cuyo mayor exponente fue la quiebra del Banco de Intercambio

⁶ Para análisis pormenorizado del liberalismo tecnocrático ver Mariana Heredia, “El Proceso como bisagra. Emergencia y consolidación del liberalismo tecnocrático: FIEL, FM y CEMA”, en Alfredo Pucciarelli (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura militar*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

⁷ Marcelo Cavarozzi, *Autoritarismo y democracia*, Buenos Aires, Eudeba, 2002, p. 54.

Regional (BIR), anunció el fracaso de los objetivos enunciados en el Programa. La inflación no menguaba, la recesión comenzaba a hacerse notar y las críticas se multiplicaban tanto hacia adentro de la corporación militar como en la opinión pública. En 1981, la inflación ascendió al 131%, la recesión fue del 6,5%, y el déficit público alcanzó los 18 puntos. No obstante, los resultados de este cóctel de recetas liberales ya habían producido sus efectos, a los que la crisis y las medidas adoptadas para calmarla no hicieron sino agravar.

El Programa golpeó duramente a la pequeña y mediana empresa ligada al mercado interno, atrapada ante la agresiva competencia externa y un mercado del crédito altamente especulativo que les impidió la modernización exigida y, los que se animaron, agonizaron en el intento. La concentración del capital en los grandes grupos transnacionales fue su contracara. La aventura financiera especulativa le ganó terreno a la inversión productiva. El meteórico crecimiento del endeudamiento externo fue la llave del nuevo patrón de acumulación capitalista. La deuda saltó de 8.000 millones de dólares en 1975 a 45.000 millones en 1983.

Como afirma Hugo Nochteff, fue la dictadura la que “quebró las bases y relaciones sociales, institucionales y productivas que habían sustentado y en gran medida definido a la economía argentina a lo largo de casi toda su época de industrialización.[...] Los principales efectos de las acciones políticas, sociales, económicas y represivas de la dictadura militar fueron [...] el fortalecimiento del capital concentrado; la prevalencia de las ganancias financieras sobre las productivas; la concentración del poder económico; la reducción a la mitad del techo salarial de largo plazo y el gran salto de nivel y de tasa de crecimiento del endeudamiento externo”⁸.

El mercado de trabajo

Como decíamos, el carácter aperturista de la economía que se impuso a partir del golpe de 1976, provocó un duro impacto en la estructura económico-social del país y generó ciertas tendencias que imprimieron profundos cambios en el mercado de trabajo.

Si entre 1950 y 1975, la Argentina se caracterizaba por tener un mercado laboral que la diferenciaba de los países en vías de desarrollo de la región –estaba más integrado, tenía una mayor presencia del trabajo asalariado, bajos niveles de subocupación, menos polarización en los ingresos, y sobre todo, presentaba un escaso grado de subutilización de la mano de obra⁹–, a partir de 1976 fue paulatinamente igualando a sus vecinos.

Las condiciones laborales empeoraron. Las tendencias principales estuvieron definidas por la expansión del desempleo, el crecimiento de la informalidad, la acentuación de la tercerización acompañada por la desindustrialización, la disminución del empleo asalariado¹⁰, la reducción de los sueldos y una paulatina acentuación de la

⁸ Hugo Nochteff, “La política económica en la Argentina de los noventa. Una mirada de conjunto”, en Revista *Epoca*, año 1, N° 1, diciembre 1999, p. 15.

⁹ Altimir y Beccaria señalan algunas tendencias negativas que ya estaban presentes en la economía argentina antes de 1976, como la escasa capacidad empleadora de las unidades más formales y fuerte incremento de la participación del sector terciario en la ocupación, el crecimiento del cuentapropismo. Los autores afirman que ya existían niveles de subocupación encubiertos aunque muy menores que en los otros países de la región. Véase Oscar Altimir y Luis Beccaria, “El mercado de trabajo bajo el nuevo régimen económico en Argentina”, en Daniel Heyman y Bernardo Kosacoff (eds.), *La Argentina de los noventa. Desempeño económico en un contexto de reformas*, Buenos Aires, Eudeba-CEPAL, 2000.

¹⁰ Entre 1970 y 1980, la tasa anual de crecimiento del empleo autónomo fue de 27 por mil, mientras que la del empleo asalariado fue de 11,9 por mil. Ver Susana Torrado, “La cuestión social”, en Román

brecha salarial. El aumento de la inflación a partir de 1981 consolidó la tendencia decreciente del salario.

Sin embargo, en contraste con el mercado de trabajo en los noventa, la destrucción de empleo en el sector industrial, producto de la incapacidad local para competir con productos extranjeros, fue compensada con el aumento de la actividad cuentapropista y el crecimiento del sector terciario, comercial y financiero, y de la construcción.

Estas profundas transformaciones operadas en el seno de la estructura económico-social argentina no hubieran sido posibles sin las medidas represivas y disciplinamiento social que se desplegaron a la par.

El régimen: facciones y disputas internas

El fin de la presidencia de Videla y el fracaso del Plan Martínez de Hoz, sin bien marca una inflexión visible en el Proceso de Reorganización Nacional, no deja de ser sólo un punto de condensación de las constantes disputas internas dentro del régimen y las dificultades de éste por cumplir con sus objetivos fundacionales. Los temas que provocaron las fricciones más beligerantes fueron, a lo largo del período, la política económica, las políticas de apertura y de acercamiento con los partidos políticos moderados y la política exterior (el conflicto por el Beagle con Chile y la visita de la CIDH), entre otros.

La división tripartita de cargos y funciones si bien había intentado atenuar la hegemonía del Ejército dentro de la constelación militar e instalar la idea de poder compartido, lejos estuvo de disolverla. A tal punto que las disidencias y pujas de poder más relevantes se desplegaron en el seno mismo de la fuerza de tierra. Diferían en sus modos de pensar la relación con los sectores civiles, los alcances de la “refundación de la Nación”, y sobre todo, la forma y el tiempo en que los militares debían dar por concluida su misión, y en este caso, cuál sería su rol en “tiempos de paz”.

La división entre “duros” y “blandos” o “halcones” y “palomas” dentro del Ejército es una primera distinción que generalmente se establece. El primero lo constituían los Comandantes de los Cuerpos del Ejército, involucrados activamente en la puesta en marcha de la represión, los llamados *señores de la guerra*. En el segundo, más político, se encontraban Harguindeguy, Galtieri, Viola y Videla¹¹. La cuestión que enfrentaba a estos grupos era sobre los plazos para dar por concluida la etapa fundacional e instalar la “auténtica democracia”. Los “señores de la guerra” solían inquietarse ante los más tenues intentos de diálogo político con la “partidocracia”.

El General Viola era quien pensaba que una vez alcanzadas ciertas metas, la derrota de la subversión, el saneamiento de la economía, el *aggiornamento* de los partidos políticos al nuevo orden y el disciplinamiento de las fuerzas sindicales, debía abrirse paso a una transición escalonada que culminara en elecciones. Videla sintetizaría la propuesta en la idea de trabajar hacia una “convergencia cívico-militar”. El grupo de

Lejtman (ed.), *Quince años de democracia. Ensayos sobre la nueva república*, Buenos Aires, Norma, 1998.

¹¹ Como señala Paula Canelo, Viola y Videla no eran exactamente lo mismo, aunque tuvieron una larga trayectoria juntos. Viola siempre fue “más político” que su compañero de armas, quien era más bien un hombre “del Ejército”. El primero se manejó con cierta autonomía del Presidente, manteniendo un espacio para su propio juego. Ver Paula Canelo, “La política contra la economía: los elencos militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional en Pucciarelli”, Alfredo Pucciarelli (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura militar*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

los “duros”, comandado por General Díaz Bessone, se pensaba en el poder con mayor perpetuidad y no imaginaba una transición sino por etapas, donde gradualmente se procedería a una “transferencia del poder”, pero siempre tutelado por las Fuerzas Armadas.

Un tercer grupo lo constituyó la Armada, comandada por el Almirante Massera, quien concibió un plan político propio en competencia feroz con Videla. Confrontación que lo llevó a establecer alianza con los “duros”, con quienes no compartía la visión del futuro, pero que le eran funcionales a su estrategia personal. El marino imaginaba factible una legitimación popular del Proceso de Reorganización Nacional que culminara en una salida política que lo tuviera a él como líder. Hacia la consecución de sus objetivos, estableció diálogos con la derecha peronista y otros sectores políticos y llegó a conformar su propio partido. La Escuela de Mecánica de la Armada fue el centro de sus operaciones, donde llegó a constituir un staff de “asesores” con los militantes secuestrados.

No obstante, los escauceos por el poder, exacerbados por un fraccionamiento del mando tanto en la distribución de los espacios de decisión dentro del Estado como también en la división territorial para la implementación de la “guerra contra la subversión”, no tuvieron bandos tan claros y permanentes, sino que se entrecruzaron con las querellas propias de un poder “feudalizado” donde cada quien peleaba su propia batalla a partir de intereses individuales, corporativos o facciosos. Las políticas económicas de Martínez de Hoz fueron un parte aguas que no replicó al detalle las divisiones antes mencionadas¹². Díaz Bessone se encontraba entre los más acérrimos opositores, y otro “duro” como Saint Jean no dejaba de elogiar las medidas impuestas. El Almirante Massera, en su disputa de poder dentro de la Junta con el General Videla, criticaba las medidas en torno a la cuestión salarial como discurso demagógico en su expectativa de conformar una alternativa política con base en el consenso popular. Por otra parte, las pretensiones privatizadoras de los cuadros liberales también fueron motivo de airada oposición de los funcionarios castrenses, cercanos a Viola, al frente de Fabricaciones Militares que se negaban a una retracción del Estado en el área productiva. Viola mismo mantuvo ciertas reservas ante los resultados surgidos de la aplicación del plan económico. Los que le brindaron un apoyo firme y estable al Ministro durante toda su gestión fueron Videla, Harguindeguy y Galtieri.

Las confrontaciones llegaron a ser feroces, y no dispensaron en aplicar los métodos de la “guerra contra la subversión” contra los adversarios internos. Las desapariciones del embajador Hidalgo Solá y de la diplomática Elena Holberg se inscriben en esta trama de intrigas en el seno de la cúpula militar. Detrás de estos crímenes estuvo la mano del Almirante para socavar el poder de Videla.

El clima de tensión no cesó nunca, aunque el transcurso de los acontecimientos iría produciendo nuevas controversias, alineamientos y fracturas. La sucesión de Videla en la presidencia desató intrigas y tensiones que, aunque culminaron en la esperada designación de Viola, recrudecieron las tormentas internas. Electo por el período 1981-1984, un golpe palaciego lo desplazó del poder antes de que cumpliera un año en su cargo. El General Leopoldo Fortunato Galtieri, el hombre del Ejército promovido a la Junta por el mismo Viola, lo desplazaba del poder.

No obstante, a pesar de tantas fisuras, el régimen tuvo su punto de fusión: la “lucha contra la subversión”.

¹² Paula Canelo, “La política contra la economía: los elencos militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional en Pucciarelli”, Alfredo Pucciarelli (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura militar*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

El inicio del fin

Durante su corta presidencia, el General Roberto Viola intentó acelerar el paso hacia la apertura política con iniciativas tendientes a mejorar la relación del gobierno militar con la sociedad civil en tres sentidos. Por un lado, promovió una redefinición de la política económica orientada hacia los sectores de la producción y no del financiero. Un gabinete de corte más civil y “más pluralista” y una política dialoguista con los partidos y sindicatos completaron la estrategia.

En julio de 1981, se constituyó la Multipartidaria conformada por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el MID, el Partido Intransigente y la Democracia Cristiana. Ese mismo año, comenzó a reorganizarse la CGT con Saúl Ubaldini a la cabeza.

Los movimientos hacia la apertura y la activación de la sociedad civil agudizaron las tensiones internas de un régimen que había perdido el rumbo y había sido ganado por las pujas intestinas que, como fuerzas centrífugas, impedían la reacomodación hacia una dirección compartida. El fin de la “guerra contra la subversión” los dejó sin ese común objetivo que los ligaba. El ex Ministro de Interior, Albano Harguindeguy, ahora asesor de la presidencia puesto por los “duros”, intentaba desempolvar el proyecto del MON, “Movimiento de Opinión Nacional”—una vieja iniciativa que apenas llegó a nacer durante la presidencia de Videla—, como un posible partido militar que protagonizara la transición, para confrontar con la alternativa motorizada por Viola y Liendo, que veían una salida negociada con los dos partidos mayoritarios: UCR y PJ.

En diciembre, el intento fue clausurado por el golpe encabezado por el General Leopoldo Fortunato Galtieri, su antiguo hombre de confianza convertido en un “duro” que pretendía retornar a las “fuentes del proceso”. El nombramiento de Roberto Alemann en el Ministerio de Economía fue una señal clara. Sin embargo, el proceso de apertura seguía su propio curso. La percepción de un régimen sin futuro incentivó la recuperación del espacio público y la movilización política y social continuo *in crescendo*. El 30 de marzo de 1982, la CGT lanzó un paro nacional con movilización. La multitudinaria manifestación terminó en una fuerte represión, con cientos de detenidos.

Pocos días después, el 2 de abril, el gobierno retomó la iniciativa declarando la Guerra de Malvinas. La operación de la toma de las Islas tuvo dos objetivos: restituir la legitimidad del régimen autoritario y cimentar la cohesión interna. Ni bien iniciadas las operaciones, los objetivos parecieron cumplirse. La sociedad en su conjunto reivindicó la iniciativa militar, la dirigencia política y sindical se sumó a la ofensiva de recuperación de la soberanía nacional, el frente interno pareció calmarse ante una nueva meta que les devolvía ese punto de fusión perdido. El 10 de abril, más de 100.000 personas convocadas por el gobierno se movilizaron a Plaza de Mayo en apoyo de la guerra.

La estrategia de la toma de las Islas se sustentó en la convicción de que los ingleses no responderían a la agresión y, si eso sucedía, en que los Estados Unidos apoyarían la postura Argentina. Nada de esto ocurrió. Fue así que las tropas argentinas, mal preparadas y con armas y equipos lamentables, se enfrentaron a las tropas británicas altamente entrenadas y tecnificadas. El saldo es conocido, más de 600 soldados perdieron la vida en las Islas y los mares del sur. Mientras en el continente los argentinos recibían a través de los medios masivos de comunicación las falsas noticias

sobre las victorias obtenidas, en el campo de batalla, el frío, el hambre y el desbande de los soldados conscriptos eran los datos ciertos de la derrota.

El 14 de junio, la Argentina presentó su rendición. La aventura en el Atlántico Sur había concluido. El régimen perdió toda posibilidad de reconstruir el consenso social y las disputas internas eclosionaron. Tras el alejamiento de Galtieri, la sucesión presidencial no pudo resolverse fácilmente. Los conflictos inter-armas se intensificaron a un punto tal que la Fuerza Aérea y la Armada abandonaron la Junta. El General Reynado Bignone asumió la presidencia en medio de la desintegración del régimen autoritario. Los soldados sobrevivientes retornaron del frente por la noche, ante el silencio e indiferencia de esa misma sociedad que poco tiempo antes los había vivido como héroes.

A partir de entonces, se inició el proceso de transición hacia la democracia, donde la Multipartidaria y el gobierno de facto pugnaron por una apertura negociada. Los principales partidos buscaban pactar una salida electoral que garantizara el fin del intervencionismo militar y de los condicionamientos de las Fuerzas Armadas en el futuro, como también la gobernabilidad, atemperando las fuertes demandas de una sociedad cada vez más movilizada. Los militares, por su parte, intentaron asegurarse de que no se realizara revisión alguna de lo actuado, y así pagar los menores costos de una retirada apresurada. A pesar del diálogo propuesto como forma de avanzar hacia las elecciones, la relación estuvo lejos de un trato armónico. La cruenta represión desatada en la movilización de la Multipartidaria, el 16 de diciembre de 1982, da cuenta lo difícil del proceso y de las resistencias de los militares a abandonar el poder.

A estos dos actores claves de la apertura, deben sumárseles el movimiento de derechos humanos y el movimiento obrero. Ambos también tuvieron un fuerte protagonismo, intentando incluir en la agenda de la transición sus propias demandas.

Finalmente, el 30 de octubre de 1983, se realizaron las elecciones. Ganó el candidato radical, Raúl Alfonsín, dejando atrás la idea de un peronismo imbatible en las urnas. Se inició así una nueva etapa para la sociedad argentina impregnada aún de la experiencia dramática vivida en esos tiempos. Se le sumaron las dificultades del duro desafío de construir una sociedad democrática luego de tantos años de fuerte conflictividad y violencia. La cuestión de las violaciones a los derechos humanos pasó a formar parte de la agenda política del país como nunca antes.

Bibliografía sugerida

Altimir, Oscar y Luis Beccaria, “El mercado de trabajo bajo el nuevo régimen económico en Argentina”, en Heyman, Daniel y Bernardo Kosacoff (eds.), *La Argentina de los noventa. Desempeño económico en un contexto de reformas*, Eudeba-CEPAL, Buenos Aires, 2000.

Caraballo, Liliana; Noemí Charlier; Liliana Garuli; Patricia Barrotarán, *La dictadura (1976-1983): testimonios y documentos*, Eudeba, Buenos Aires, 2007.

Cavarozzi, Marcelo, *Autoritarismo y democracia*, Eudeba, Buenos Aires 2002.

De arriba, Alberto, *El golpe*, Sudamericana, Buenos Aires, 2001.

Heredia, Mariana, “El Proceso como bisagra. Emergencia y consolidación del liberalismo tecnocrático: FIEL, FM y CEMA”, en Pucciarelli, Alfredo (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura militar*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.

Lejtman, Román (ed.), *Quince años de democracia. Ensayos sobre la nueva república*, Norma, Buenos Aires, 1998.

Lida, Clara; Horacio Crespo; Pablo Yankelevich (comp.), *Argentina, 1976: Estudios en torno al golpe de Estado*, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, Buenos Aires, 2008.

Nochteff, Hugo, “La política económica en la Argentina de los noventa. Una mirada de conjunto”, en Revista *Epoca*, año 1, N° 1, diciembre 1999.

Novaro, Marcos; Vicente Palermo, *Historia Argentina. La dictadura militar 1976/1983: Del golpe de Estado a la restauración democrática*, Paidós, Buenos Aires, 2003.

Pucciarelli, Alfredo (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura militar*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.

Quiroga, Hugo, *El tiempo del “Proceso”*, Homo Sapiens, Rosario, 1999.

Quiroga, Hugo; César Tcach Abad y Waldo Ansaldi (comps.), *Argentina 1976- 2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia*, Homo Sapiens, Rosario, 2006.

Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001.

Yankelevich, Pablo y Silvina Jensen, *Exilios, Destinos y experiencias bajo la última dictadura militar*, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2007.